

Iquique, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio 1, comparecen doña Lorena Fabiola Farías Cisternas, labores de hogar; y don Iván Muñoz Silva, empleado, ambos domiciliados en calle San Martín N° 255, oficina 94, Edificio Empressarial de esta ciudad, quienes interponen demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de Aguas del Altiplano S.A., representada por su agente regional, don Cristian Barahona Rubio, ambos domiciliados en calle Esmeralda N° 340, de este puerto.

Exponen, en síntesis, que se encuentran casados bajo el régimen de sociedad conyugal, y que la actora Farías Cisternas es dueña del inmueble ubicado en Pasaje 19 N° 2241, del Conjunto Habitacional Estrella del Norte, II Etapa, de la comuna de Alto Hospicio, cuyo suministro de agua potable se vio interrumpido el 25 de mayo de 2016, a raíz de la existencia de un socavón, de 2 metros en el sector donde se encontraba la llave de paso, motivo por el cual personal de Aguas del Altiplano concurrió al lugar el día siguiente, percatándose que todas las tuberías y conectores que daban hacia el inmueble se encontraban desconectados de la cámara, la que se encontraba seca y sin rastros de aguas servidas, al igual que las conexiones al interior de la vivienda.

Explican que una vez diagnosticado el problema, personal de la empresa informó que no podían realizar los arreglos necesarios, ya que el suelo bajo el inmueble estaba totalmente húmedo, con un gran socavón que hacía peligrosa su habitabilidad, así como labores correctivas.

Afirman que en el inmueble existe un socavón de aproximadamente 10 metros de profundidad, lo que generó serios daños estructurales, lo que devino en su declaración de inhabitabilidad por parte de la Dirección de Obras Municipales el 20 de junio de 2016, emitiéndose por dicha autoridad el 24 de enero de 2017 un nuevo certificado declarando la propiedad como inhabitable e irreparable, respondiendo la demandada al requerimiento hecho por los actores el 14 de septiembre de 2018, que los daños sufridos se debieron a que el inmueble se encuentra emplazado en suelo de alta concentración salina.

Agregan que con posterioridad al descubrimiento de las filtraciones se verificaron otras emergencias durante el año 2016, v.gr. el 26 de mayo, por hundimiento de terreno; el 28 de mayo por trabajo mal ejecutado; el 3 de junio, reitera reclamo anterior; y el 4 de junio, por anegamiento por aguas servidas, oportunidades en las



que personal de Aguas del Altiplano concurrió pero excediendo los tiempos comprometidos.

Refieren que la demandada no adoptó las medidas necesarias y urgentes al momento de descubrirse las primeras roturas de redes ni han existido procedimientos especiales al efecto, pues de haberse realizado, hubiera sido posible mitigar los daños sufridos.

Alegan que existiría presunción de culpa de la demandada, pues una empresa no solo es responsable de la puesta en marcha o la continuidad de una operación, y a la época de la rotura de matrices no dispuso ninguna medida tendiente a evitar los perjuicios aparejados, sumado al deber de las empresas de servicios sanitarios, de conformidad a las normas sectoriales, de mantención permanente, preventiva, operativa, adecuada y oportuna de la red pública de distribución y recolección de aguas, con el objeto de evitar un perjuicio para la comunidad a la cual van dirigidas sus prestaciones, debiendo considerar en su instalación y en su mantención, la especial característica de encontrarse emplazada las redes y tuberías en suelo salino de estructura colapsable.

Entienden que la demandada ha infringido su deber de realizar una mantención y atención de la red pública, preventiva, oportuna, adecuada y continuada, consistiendo la diligencia y cuidado que le era exigible, en adoptar las medidas de mantención pertinentes y anticipadas para evitar filtraciones en el sector, como la ocurrida en autos, que trajo consigo socavones, asentamiento de terreno y en general una serie de daños en el inmueble sub lite.

Afirman que los daños estructurales sufridos en el inmueble son de tal magnitud que la única manera de reconstruirlo, es previa demolición y reparación del suelo, por lo que estima el daño emergente en la suma de \$80.000.000; igualmente, y en virtud del principio de reparación integral del daño, denuncia la desvalorización comercial del inmueble, estimándola en la suma de \$15.000.000; y en cuanto el daño moral, lo funda en las consecuencias negativas para la salud que los hechos acaecidos le han reportado, lo que ha significado un desgaste físico y emocional, avaluándolo en \$50.000.000, por cada demandante.

Concluyen solicitando acoger la demanda, condenándose a la demandada al pago de una indemnización total de \$195.000.000, o la suma que el tribunal estime, las que deberán ser reajustadas desde la fecha del hecho denunciado hasta su pago efectivo, con costas.

A folio 17, la demandada solicitó el rechazo de la acción, con costas.



En primer término, opone la excepción de prescripción, ya que invocando la actora la responsabilidad civil extracontractual, conforme el artículo 2332 del Código Civil, la acción se encuentra actualmente prescrita, ya que los hechos generadores del daño descritos en la demanda ocurrieron el 26 de mayo de 2016.

En subsidio, niega y controvierte los hechos en que se funda la demanda, rechazando cualquier responsabilidad en estos.

Enseguida y también en subsidio, alega que la relación existente entre las partes surge de un contrato de suministro, no siendo aplicable el régimen de responsabilidad extracontractual, el que cabe en la medida que los hechos no tengan relación con dicho vínculo contractual, por lo que fundándose la demanda en supuestos incumplimientos de las obligaciones emanadas del mismo, el régimen aplicable es el contractual, existiendo así un error al momento de elegir el estatuto jurídico aplicable.

A continuación, refiere que en caso de estimarse la existencia de una relación de carácter extracontractual, su parte no ha incurrido en culpa en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios sanitarios que los liga, limitando las demandantes a atribuir las filtraciones ocurridas a una supuesta falta de mantención de la red de alcantarillado y/o agua potable, no pudiendo concluirse el factor de imputación atribuido, ya que incluso el artículo 122 del D.S. 1199 reconoce implícitamente la posibilidad de que la red falle, no pudiendo concluirse entonces que ha existido culpa o negligencia, no existiendo norma alguna que establezca un estándar infalible o una responsabilidad objetiva, estableciendo la obligación de contar con un procedimiento especial para atender emergencias.

Afirma que ha dado cumplimiento cabal a sus obligaciones legales y reglamentarias, utilizando en la red del lugar, materiales de alta resistencia que se encontraban dentro de los rangos de durabilidad; estableciendo programas de mantención de la red sanitaria, los que se encuentran debidamente informados a la Superintendencia de Servicios Sanitarios; y contando con procedimientos para atender emergencias los que se han cumplido.

Luego alega la falta de legitimación pasiva, pues es un hecho público y notorio que la comuna de Alto Hospicio se encuentra emplazada sobre suelo de alta concentración salina, razón por la que las construcciones que en ella se levanten deben responder a estándares especiales de constructibilidad, por tanto, la responsabilidad radica en quien construyó el inmueble y no en su parte, quien no tiene como giro la construcción de inmueble.



Concluye indicando que los perjuicios reclamados no están justificados y son sobrevalorados, alegando la legitimación activa de don Iván Núñez Silva para accionar por daño emergente, y por la desvalorización del inmueble, por no ser propietario.

A folio 21, se tuvo por evacuada la réplica en rebeldía de la demandante.

A folio 23, la demandada evacuó la dúplica, ratificando y reiterando alegados, enfatizando en la desproporcionalidad y falta de explicación del quantum indemnizatorio.

A folio 31, se efectuó el llamado a conciliación, la que no prosperó.

A folio 34, se recibió la causa a prueba.

A folio 127, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LA TACHA DE LOS TESTIGOS DOÑA SUYING NELIDA LAY SON AGUILERA Y DON MARIO ARTURO OSSANDON PIZARRO, DE FOLIO 5 DEL CUADERNO 3.0 INCIDENTE GENERAL:

PRIMERO: La demandante, alegó la inhabilidad de los testigos antes individualizados, regulada en el numeral 5° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, por cumplir ambos funciones en la empresa demandada hace más de 10 años, existiendo una relación de subordinación y dependencia, por lo que no gozan de la suficiente imparcialidad para declarar en juicio.

SEGUNDO: La demandada solicitó el rechazo de la incidencia, fundado en que no se ven influenciadas sus declaraciones al no verse perjudicada sus relación laboral, puesto que existen una serie de derechos y garantías laborales que la estabilidad laboral.

TERCERO: Con los propios dichos de los testigos, se acogerán las inhabilidades invocadas a su respecto, desde que consta que se desempeñan como trabajadores dependientes de la accionada, configurándose la causal del artículo 358 N° 5 del Código Procedimiento Civil, careciendo en consecuencia de la suficiente imparcialidad para declarar en autos.

II. EN CUANTO AL FONDO.

CUARTO: Doña Lorena Fabiola Farías Cisternas y don Iván Muñoz Silva demandan de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual a la empresa Aguas del Altiplano S.A., conforme lo reseñado en el exordio, solicitando se le condene al pago de una indemnización total de \$195.000.000, o aquella que el tribunal estime, más reajustes, con costas.



QUINTO: La demandada solicitó, a su turno, el rechazo de la acción deducida, por los fundamentos que ha esgrimido, con costas.

SEXTO: Para demostrar los hechos que fundan su demanda, la demandante rindió la siguiente prueba:

Documental.

A folios 51 y 52, copias digitalizadas de los siguientes instrumentos:

1. Permiso de edificación de la propiedad sub lite.
2. Especificaciones técnicas de arquitectura, “Proyecto de reconstrucción de viviendas afectadas por socavones” emitido en abril de 2020 por don Juan Carlos García Arenas, Arquitecto.
3. Acta de reunión unidad de socavones Serviu Región de Tarapacá.
4. Anexo de contrato de arrendamiento de 1 de agosto de 2019.
5. Boletas electrónicas N° 9437464 y N° 10630904, emitidas por la demandada.
6. Carta de 30 de agosto de 2018, suscrita por la demandante.
7. Carta de 14 de septiembre de 2018 suscrita por la demandada.
8. Certificado de daños N° 006/2018 emitido por la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio.
9. Certificado de daños N° 062/2016 emitido por la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio.
10. Certificado de dominio vigente de la propiedad sub lite.
11. Certificado N° 550/15 emitido por la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio.
12. Certificado de N° 072/18 emitido por la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio.
13. Informe psicológico de 20 de noviembre de 2018.
14. Certificado solicitud de audiencia Ley N° 20.730.
15. Inscripción propiedad sub lite.
16. Contrato de arrendamiento de 29 de diciembre de 2016.
17. Escritura pública de compraventa de 27 de noviembre de 2007.
18. Decreto Alcaldicio N° 407/2018.
19. dos comprobantes de depósitos emitidos por Banco Chile.
20. Descripción de la obra a ejecutar, Informe Técnico emitido del año 2019 respecto de la propiedad sub lite.
21. Proyecto de reconstrucción de vivienda dañada por socavón.



22. Certificado de matrimonio de los demandantes.

23. Especificaciones técnicas de arquitectura, proyecto de reconstrucción de viviendas afectadas por socavones.

24. Reclamo interpuesto ante la Superintendencia de Servicios Sanitario folio N° 20307055.

25. Informe de suelos construcción viviendas localidad El Boro, comuna de Alto Hospicio.

26. Ord. Regional, Región de Tarapacá N° 6233/2017 emitido por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

27. Informe de atención psicológica de 9 de marzo y 5 de abril ambas de 2022.

28. Fotografías del inmueble de autos.

29. 21 fotografías.

Testimonial.

A folio 66, constan las declaraciones de doña Karen Paola Vera Rodríguez y don Andrés Caro Gamboa.

Oficios.

A folio 86, oficio y anexo 1, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

A folio 117, oficio N°1257 del Serviu Tarapacá.

A folio 124, oficio N° 02/2023 de la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio.

Otros.

A folio 54, se tuvo a la vista las causas Rol C-3715-2018, caratulada “Gallardo y Otros con Aguas del Altiplano S.A.”, de este Tribunal; Rol C-2503-2011, caratulada “Aravena y Otros con Aguas del Altiplano S.A.”, del Primer Juzgado de Letras de Iquique; y Roles C-3033-2020, caratulada “González con Aguas del Altiplano S.A.” y C-381-2019 caratulada “Acuña con Aguas del Altiplano S.A.”, ambas del Segundo Juzgado de Letras de esta ciudad.

A folio 78, se llevó a cabo audiencia de percepción documental, visualizándose el contenido del dispositivo guardado en custodia bajo el N° 769-2022, correspondiente a un video en formato MP4 y dos enlaces de videos los cuales constan en dos documentos Word.

SÉPTIMO: A su turno, para acreditar sus asertos, la demandada rindió la siguiente prueba:

Documental:

A folio 23 y 67, copias digitalizadas de:

1. Certificado de avalúo fiscal.

2. Ord. N° 73 de 9 de enero de 2014 de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.



3. Manual Tuberías y Fittings HDPE.
4. Bases Definitivas, Estudio Tarifario Empresa De Servicios Sanitarios Aguas Del Altiplano S.A., Período 2013-2018.
5. Manual de uso y Mantención de la Vivienda, Región de Tarapacá, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2007.
6. Informe número 612.685-A, sobre Lineamientos para determinación de colapsabilidad de suelos por disolución de sales del IDIEM.
7. Información geológica de la comuna de Alto Hospicio, geología y suelos salinos, SERNAGEOMIN.
8. Ficha 16, sobre suelos salinos colapsables, elaborada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
9. Manual del cliente, emitido por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Confesional

A folios 94 y 95, constan los dichos de los absolventes don Iván Dionisio Muñoz Silva y doña Lorena Fabiola Farías Cisternas.

Pericial.

A folio 101, rola informe pericial de don Marcial Flores Yavar.

OCTAVO: En atención a las alegaciones de las partes entonces, lo primero que debe determinarse es la naturaleza del vínculo jurídico existente entre la demandada y los actores por la supuesta rotura de matriz, ocurrida en el Pasaje 19 N° 2241 del Conjunto Habitacional Estrella del Norte, II Etapa, de la comuna de Alto Hospicio, para lo cual debe volverse la mirada al Decreto N° 1199 del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba el “Reglamento de las Concesiones Sanitarias de Producción y Distribución de Agua Potable y de Recolección y Disposición de Aguas Servidas y de la Norma Sobre Calidad de Atención a los usuarios de estos Servicios”, cuyo artículo 92 estatuye una relación de naturaleza contractual entre el usuario y el prestador de los servicios públicos sanitarios, la que se perfecciona desde la fecha en que éste emita el certificado de instalación de agua potable y de alcantarillado.

Por otra parte, y de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° de la Ley General de Servicios Sanitarios, no cabe sino concluir, que la empresa demandada es un servicio público de distribución de agua potable, toda vez que su objeto es prestar dicho servicio, a través de las redes públicas exigidas por la urbanización conforme a la ley, a usuarios finales obligados a pagar un precio por dicha prestación; conduciendo el agua producida hasta su entrega en el inmueble del usuario, definición contenida en el inciso segundo del artículo 3° de la referida ley.



NOVENO: Ahora bien, en el contexto de dicho vínculo contractual, tanto usuario como prestador del servicio detentan obligaciones; para aquél, los artículos 40 de la Ley General de Servicios Sanitarios, y 93 del Reglamento, establecen, entre otras obligaciones, “El mantenimiento de las instalaciones interiores domiciliarias de agua potable y de alcantarillado es de exclusiva responsabilidad y cargo del propietario del inmueble”; imponiendo para el prestador el inciso segundo de la primera de las normas citadas, “[...] El mantenimiento del arranque de agua potable y de la unión domiciliaria de alcantarillado [...]”.

A su vez, el referido cuerpo normativo define cada uno de los elementos, cuyo mantenimiento es de cargo del propietario del inmueble y del prestador del servicio, estableciendo como de responsabilidad de éste el arranque de agua potable, definido como el “tramo de la red pública de distribución, comprendido desde el punto de su conexión a la tubería de distribución hasta la llave de paso colocada después del medidor, inclusive”, y la unión domiciliaria de alcantarillado, detallada como “[...] el tramo de la red pública de recolección comprendido desde su punto de empalme a la tubería de recolección, hasta la última cámara de inspección domiciliaria exclusiva [...]”.

DÉCIMO: El examen de dichas normas legales entonces advierte que la relación contractual que existe entre la empresa prestadora de servicios y los usuarios alcanza solo la unión domiciliaria, y no, como pretende la demandada, las redes públicas de distribución de agua potable, definidas en el artículo 53 letra e) de la Ley General como “[...] aquellas instalaciones exigidas por la urbanización conforme a la ley, inclusive los arranques de agua potable operadas y administradas por el prestador del servicio público de distribución a las que se conectan las instalaciones domiciliarias de agua potable [...]”, y dentro de las cuales se encuentra la matriz existente en Pasaje 19 de la comuna de Alto Hospicio

UNDÉCIMO: En consecuencia, cualquier situación que se origine con ocasión de éstas entre las partes, no cabe dentro del vínculo contractual que las une; consideraciones que llevan a desestimar la defensa de la demandada de inexistencia del estatuto de la responsabilidad aquiliana, por estimarlo inaplicable en la especie.

DUODÉCIMO: Ahora, zanjado el régimen de responsabilidad aplicable en autos, y previo a analizar los requisitos de la acción ejercida, se debe revisar la excepción de prescripción opuesta por



la demandada, fundada en que los perjuicios sufridos por la demandante se habrían originados en hechos ocurridos con anterioridad al 26 de mayo de 2016, por lo que a la época de la presentación de la demanda y su notificación –el 25 de agosto y 13 de octubre ambas de 2020, respectivamente- las acciones para perseguir su responsabilidad extracontractual se encontraban prescritas.

DECIMOTERCERO: Para su resolución entonces, debe recordarse que la regla general, en materia extracontractual, se encuentra regulada en el artículo 2332 del Código Civil, norma cuya literalidad no ofrece dudas en cuanto a que reglamenta la situación normal en que el perjuicio es coetáneo al hecho que lo origina, pero si los perjuicios provenientes de un suceso lesivo se hacen manifiestos después de la ocurrencia de éste, la prescripción de la acción indemnizatoria puede y debe ser contada sólo desde que el daño se hace evidente, pero no desde que ocurre el hecho mismo (en este sentido ver Elorriaga D. Fabián (2011). Del día de inicio del plazo de prescripción de una acción indemnizatoria cuando el perjuicio se ha manifestado con posterioridad al hecho que lo origina. En VV.AA: *Prescripción extintiva. Estudios sobre su procedencia y funcionamiento en Derecho Público y Privado*. Cuadernos de Extensión Jurídica. Universidad de Los Andes 21. Chile, pp. 39-61).

DECIMOCUARTO: Tal observación, por cierto, encuentra asidero en el caso sub-lite, desde que si bien la data del hecho dañoso fijada en la demanda –comprobación del socavón existente el 25 de mayo de 2016-, no es menos cierto que los perjuicios cuyo resarcimiento se persigue –traducidos en los daños sufridos en el inmueble sub-lite-, pudieron ser constatados fehacientemente sólo con la declaración efectuada por la Dirección de Obras Municipales el 24 de enero de 2017, en que se determinó como inhabitable e irreparable la propiedad debido a los “[...] daños sufridos en la estructura de la vivienda, por asentamiento diferencial y socavamiento de terreno [...]”, y en la que los demandantes pudieron encontrarse en la situación de experimentar el daño objeto de su acción.

DECIMOQUINTO: En atención a lo anterior, la excepción en comento será desestimada, puesto que desde la época referida los demandantes pudieron tener conocimiento claro de los detrimentos sufridos a su inmueble y las razones del mismo, por lo que desde aquel momento, la acción se encuentra a su disposición, máxime cuando “[en] tanto no exista perjuicio, mientras el daño no se haya



materializado o manifestado en alguna forma, nada puede indemnizarse [...]”. (Elorriaga D. Fabián (2011). Ob cit., p. 42).

DECIMOSEXTO: Resuelto lo anterior, como sabemos, la responsabilidad perseguida en autos debe cumplir ciertos presupuestos, a saber, a) la existencia del hecho ilícito fundamento de la acción; b) de los daños que el hecho le haya causado a los demandantes; c) del necesario nexo causal entre el hecho doloso o culposo atribuido y el daño, el que debe ser una consecuencia inmediata y directa de aquél; y, d) la capacidad del autor para incurrir en el delito o cuasidelito civil que se imputa; todos los cuales, por mandato del artículo 1698 del Código Civil, deben ser probados por las actoras.

DECIMOSÉPTIMO: Luego, la resolución del *quid* del asunto debe considerar que la concesión de servicios sanitarios, tiene por objeto permitir el establecimiento, construcción y explotación de los servicios públicos destinados a producir y distribuir agua potable, recolectar y disponer de las aguas servidas, conforme se desprende de los artículos 1 N° 1 y 7 de la Ley General de Servicios Sanitarios, debiendo el prestador, conforme sus artículos 34 y 36, garantizar la continuidad y calidad de los servicios, los que sólo podrán verse afectados por fuerza mayor, siendo, como se dijo, la red pública de distribución de responsabilidad del concesionario, la que debe ajustarse, según lo impone el artículo 98 del Reglamento de las Concesiones Sanitarias de Producción y Distribución de Agua Potable y de Recolección y Disposición de Aguas Servidas y de la Normas Sobre Calidad de Atención a los usuarios de estos Servicios, a la norma chilena NCh 691 “Agua Potable – Conducción, Regulación y Distribución; en tanto, la referida a los sistemas de recolección de aguas servidas deberá cumplir con la norma chilena NCh 1105 “Alcantarillado de Aguas Residuales – Cálculo y diseño de redes”.

Finalmente, el artículo 99 del Reglamento impone al prestador el deber de tener en aplicación un programa permanente de mantención preventiva de sus redes de alcantarillado, así como mantener disponible y sin interrupción la red pública para la evacuación de las aguas servidas provenientes de los inmuebles, de modo que tal red no produzca inundaciones, filtraciones, daños u otros efectos, salvo causa de fuerza mayor, desperfectos causados por el mal uso o ejecución defectuosa de la instalación domiciliaria no imputable a la empresa.

DECIMOCTAVO: En consecuencia, acorde a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas, las empresas de



servicios sanitarios tienen el deber de mantención permanente, preventiva, operativa, adecuada y oportuna de la red pública de distribución y recolección de aguas, con el objeto de evitar un perjuicio para la comunidad a la cual van dirigidas sus prestaciones.

DECIMONOVENO: Ahora bien, en cuanto a la existencia de un hecho ilícito, que los actores lo hacen consistir en la falta de procedimientos o protocolos preventivos, que habría provocado constantes roturas de matrices y filtraciones de agua potable en el inmueble sub-lite, originando la suspensión del suministro de agua potable el 25 de mayo de 2016, y provocando los daños en el inmueble de propiedad de la actora materia de la acción, de la carta de Aguas del Altiplano, Ord. Regional, Región de Tarapacá N° 6233/2017 emitido por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y fotografías del inmueble de autos, todos de folio 51; fotografías de folio 52; oficio y anexo 1, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de folio 86; los videos –contenidos en predrive custodiado bajo el N° 769-2022, exhibidos en la audiencia de percepción documental de folio 78; informe de perito de folio 101; y la confesional de folio 94, emanan presunciones que, conforme los artículos 426 del Código Procedimiento Civil, y 1712 del Código Civil, por sus caracteres de precisión, gravedad y concordancia, permiten tener por establecido que el 25 de mayo de 2016 se provocó una rotura de la matriz de la red pública de agua ubicada en el Pasaje 19 a la altura del N° 2241 (Actual Pasaje Ebenezer N° 2241) de la comuna de Alto Hospicio, a raíz de la existencia de un socavón en el sector donde se encontraba la llave de paso, lo que ocasionó un corte de suministro de agua potable en el inmueble de propiedad de la actora doña Lorena Farías Cisternas, de lo cual se informó a personal de la empresa sanitaria al día siguiente, quienes verificaron la circunstancia de encontrarse las tuberías desconectadas de la cámara, desperfecto que no pudo ser corregido al encontrarse el suelo totalmente húmedo.

VIGÉSIMO: Las presunciones configuradas permiten concluir que la empresa sanitaria infringió las normas de los artículos 40 de la Ley de Servicios Sanitarios y 99 del Reglamento, al no dar cumplimiento a su deber de realizar una mantención y atención de la red pública preventiva, de manera oportuna, adecuada y continuada; pudiendo concluirse que de haber empleado la accionada la diligencia y cuidados que le eran exigibles, adoptando las medidas adecuadas y oportunas de reparación o de renovación de las cañerías que se encontraban en mal estado, éstas no se



habrían desconectado de la cámara ni provocado la filtración de agua, que finalmente afectó al inmueble sub lite.

Dicha conclusión tiene asidero además en los eventos anteriores, de similares características, generados en el mismo sector, y que dieron lugar a las diversas causas tenidas a la vista a folio 54.

VIGESIMOPRIMERO: Por ello entonces, en cuanto a la existencia de los daños demandados y el vínculo causal entre éstos y el hecho ilícito, la conducta culposa atribuida a la demandada aparece como condición generadora de los efectos nocivos reclamados, desde que la infracción normativa de no dar cumplimiento al deber de mantener y atender la red pública preventiva, oportuna, adecuada y continuadamente, originó filtraciones en la red de agua potable que causaron eficazmente los daños ocurridos desde el año 2016, pues de haberse adoptado las medidas adecuadas y oportunas de reparación en la red pública que ya presentaba problemas en zonas aledañas desde los años 2005 y 2009, -lo que consta de los procesos a la vista, particularmente la causa Rol C-3715-2018 de este Tribunal-, no se habría generado una nueva rotura de matriz, ni provocado detrimentos en el inmueble de propiedad de la actora, lo que se acredita con la carta de Aguas del Altiplano; el Ord. Regional, Región de Tarapacá N° 6233/2017 emitido por la Superintendencia de Servicios Sanitarios; las fotografías del inmueble sub-lite; los certificados de daños N° 062/2016 y N° 006/2018 emitidos por la Municipalidad de Alto Hospicio, aquellos N° 550/15 y N° 072/18, y el Decreto Alcaldicio N° 407/2018, todos del referido ente edilicio y agregados a folio 51; las fotografías de folio 52; el oficio y anexo 1, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de folio 86; la audiencia de percepción documental de folio 78; el informe pericial de folio 101; y el oficio N° 02/2023 de la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio, de folio 124, de los que igualmente emanan presunciones graves, precisas y concordantes que permiten demostrar que el inmueble de propiedad de la actora, resultó afectado por el escurrimiento subterráneo de aguas, producto de la desconexión de las cañerías desde la cámara, lo que humedeció el suelo en el que se encontraba emplazada la construcción, provocando un socavón en el terreno que generó su hundimiento, lo que finalmente concluyó con la declaración de irreparabilidad e inhabilitabilidad del inmueble el 24 de enero de 2017, ordenándose consecuentemente su demolición total mediante Decreto Alcaldicio de 30 de enero de 2018, resultando ser la causa directa de los



daños del bien raíz, y una infracción legal de parte de la demandada.

VIGESIMOSEGUNDO: No obsta a lo razonado la afirmación de la entidad sanitaria de haber cumplido cabalmente sus obligaciones legales y reglamentarias, especialmente el haber utilizado materiales de alta resistencia con una durabilidad de 50 años, así como haber realizado una adecuada mantención de las redes, de conformidad a lo establecido en los “Programas de mantención de la red Sanitaria”, ni el poseer un procedimiento especial para atender las emergencias de los usuarios en el sector donde tuvo lugar la rotura de las cañerías, la que por cierto no resultó suficientemente probada, siendo insuficiente la prueba instrumental de folio 67.

VIGESIMOTERCERO: Determinado lo anterior, y en cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la accionada, los racionamientos precedentes sirven igualmente para estimar que la acción ejercida por el actor ha sido correctamente encaminada contra la empresa demandada, por tratarse de la persona que -conforme a la ley sustancial- está legitimada para discutir u oponerse a la pretensión hecha valer por el demandante en su contra, correspondiéndole entonces contradecirla, ya que en su contra se podrá declarar la relación material objeto de la demanda, configurándose como un presupuesto de la acción de carácter sustantivo y necesario para la existencia de un pronunciamiento judicial relativo al fondo del asunto, y, por tanto, de carácter objetivo (en este sentido ver SCS Roles 18.201-2019, 22.396-2019, 36.739-2019, 24.005-19, 29.169-2019, 32.036-2019, 32.133-2019, 34.020-2019, 34.022-2019, 79.422-2020 y 99.556-2020), comoquiera que apreciado el informe pericial de folio 101, conforme a las reglas de la sana crítica, esto es, recto entendimiento humano, máximas de la experiencia, y conocimientos científicamente afianzados, referidas a normas empíricas sostenidas en la razón, la madurez, el buen sentido lógico y el sano juicio, es posible concluir que el inmueble de autos no presentó daños a causa de su construcción en suelo salino, sino fueron causados por filtraciones de agua que provocaron los socavones, de manera tal que Aguas del Altiplano está facultada para ser sujeto pasivo de la presente acción.

VIGESIMOCUARTO: Ahora, en lo tocante a los daños perseguidos, en primer término sobre el *daño emergente*, manifestado en los daños estructurales sufridos en el inmueble, ella no podrá prosperar, al no haberse aportado prueba idónea que



permita determinar el monto de los daños materiales causados a la propiedad sub-judice. Misma convicción y por igual argumento se alcanza en relación a la desvalorización comercial del inmueble, razones por las cuales se omitirá pronunciamiento respecto a la falta de legitimación activa invocada respecto del actor Muñoz Silva en este acápite.

VIGESIMOQUINTO: En cuanto al *perjuicio moral*, que los actores hacen consistir en los sentimientos de angustia y tristeza, sumado al desgaste emocional y físico por la constante preocupación por el estado del inmueble; el informe psicológico de 20 de noviembre de 2018, los informe de atención psicológica de 9 de marzo y 5 de abril ambas de 2022, todos agregados a folio 51, así como la testimonial de folio 66 en los dichos de doña Karen Vera Rodríguez y don Andrés Caro Gamboa, valorados a la luz de los artículos 384 N° 2 y 426 del Código de Procedimiento Civil, en relación al 1712 del Código Civil, permite tener por acreditado que la actora Sra. Farías Cisternas presentó un cuadro depresivo con sintomatología ansiosa a causa de la rotura de matriz y hundimiento de terreno sufridos en su casa el año; por su parte don Iván Dionisio Muñoz Silva padece un trastorno de estrés postraumático con signos de reviviscencia, evasión, hipervigilancia y reactividad, lo que resulta suficiente para acoger la pretensión en este punto, regulándose prudencialmente la cuantía del daño causado en la forma que se dirá en lo resolutivo, teniendo en especial consideración que los daños que resultaron atestiguados volvieron irreparable e inhabitable la propiedad sub-judice, declarándose su demolición por parte de la autoridad técnica, conforme se razonó en los motivos precedentes.

VIGESIMOSEXTO: Las restantes alegaciones que pudieron servir de fundamento a la acción y las defensas de la accionada, en tanto su fundamento basal está constituido por las alegaciones ya latamente examinadas en este fallo, serán desechadas, al igual que la prueba restante no analizada, desde que constituirían repeticiones innecesarias de basamentos contenidos en la fundamentación de esta sentencia.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1698, 1702, 1712, 2314, y siguientes del Código Civil; y 144, 160, 170, 341, 346 y 426, todos del Código de Procedimiento Civil, se declara que:

I.- SE ACOGE, sin costas, la tacha de los testigos doña Suying Nelida Lay Son Aguilera y don Mario Arturo Ossandon Pizarro.



II.- SE ACOGE la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual deducida por doña Lorena Farías Cisternas y don Iván Muñoz Silva, en contra de Aguas del Altiplano S.A., **sólo en cuanto** se condena a ésta a pagar a cada uno de los actores, la suma de **\$20.000.000**, a título de daño moral, la que deberá reajustarse según la variación que haya experimentado el Índice de Precio al Consumidor, más los intereses corrientes desde la fecha en que el fallo quede firme y ejecutoriado.

III.- No se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida.

Regístrese, notifíquese por cédula y archívese en su oportunidad.

Rol N° 3034-2020

Dictada por **DAVID ORLANDO SEPÚLVEDA CID**, Juez Suplente del Tercer Juzgado de Letras de Iquique.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. Iquique veinticuatro de julio de dos mil veintitrés.



